

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

10409 REAL DECRETO 838/1985, de 5 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al excelentísimo señor Giulio Andreotti.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al excelentísimo señor Giulio Andreotti, a propuesta del señor Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 5 de junio de 1985,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Dado en Madrid a 5 de junio de 1985.

JUAN CARLOS R.

EL Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MORAN LOPEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA

10410 ORDEN de 7 de marzo de 1985 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete en el recurso interpuesto por la Agente de la Administración de Justicia doña Angeles Blánquez López.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 88/1984, interpuesto por doña Angeles Blánquez López, Agente de la Administración de Justicia, que actúa en su propio nombre, contra el Ministerio de Justicia, representado y dirigido por el señor Abogado del Estado, en cuyo procedimiento aparece como coadyuvante doña Carmen Candel Tárraga, Agente de la Administración de Justicia, que actúa en su propio nombre y derecho sobre materia de personal, en la adjudicación de una plaza en la Audiencia Territorial de Albacete, en concurso de traslado, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete, con fecha 27 de septiembre de 1984, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Angeles Blánquez López contra la resolución del excelentísimo señor Ministro de Justicia de 6 de febrero de 1984, estimatoria de la reposición formulada por doña Carmen Candel Tárraga, contra la resolución de la Secretaria Técnica de Relaciones con la Administración de Justicia, de 5 de mayo de 1983, que nombraba para la plaza de Agente de la Administración de Justicia de la Audiencia Territorial de Albacete a la recurrente doña Angeles Blánquez López, debemos declarar y declaramos nula por contraria a derecho tal resolución, confirmando en todas sus partes la resolución citada de la Secretaria Técnica de Relaciones con la Administración de Justicia, todo ello sin hacer una expresa declaración sobre las costas causadas en este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación literal a los autos originales, la pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 7 de marzo de 1985.-P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.

10411 ORDEN de 12 de marzo de 1985 por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 22.608 interpuesto por don Antonio Martín González.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 22.608 seguido a instancia de don Antonio Martín González, Auxiliar de la Administración de Justicia, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Albacete, que ha actuado en su propio nombre y representación, frente a la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, contra la desestimación presunta, producida por silencio administrativo del Ministerio de Justicia, del recurso de reposición interpuesto contra el acto de «retención por sanción», verificado a través de la Habilitación de Personal, con cuantía de 32.541 pesetas, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional con fecha 20 de julio de 1983, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando en parte el actual recurso contencioso-administrativo interpuesto como demandante por don Antonio Martín González, frente a la demandada Administración General del Estado, contra los actos administrativos del Ministerio de Justicia, a los que la demanda se contrae, debemos declarar y declaramos no ser conformes a derecho y, por consiguiente, anulamos los referidos actos administrativos al presente impugnados, debiendo la Administración demandada devolver íntegramente, a la parte hoy actora, la cantidad que indebidamente le fue retenida, desestimando el resto de las pretensiones que la demanda actúa, todo ello sin hacer una expresa declaración de condena en costas respecto de las derivadas del actual proceso jurisdiccional.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al rollo de la Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 12 de marzo de 1985.-P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.

10412 ORDEN de 22 de marzo de 1985 por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 22.619-P, interpuesto por don Herminio del Pozo San Segundo.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 22.619-P, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a instancia de don Herminio del Pozo San Segundo, oficial de la Administración de Justicia, con destino en el Tribunal Supremo, frente a la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, contra la desestimación presunta, producida por silencio administrativo del Ministerio de Justicia, del recurso de reposición contra el acto de «retención por sanción», verificado a través de la Habilitación de Personal, con cuantía de 48.096 pesetas, con fecha 9 de junio del pasado año se ha dictado sentencia por la referida Sala, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando en parte el actual recurso contencioso-administrativo interpuesto como demandante por don Herminio del Pozo San Segundo, frente a la demandada Administración General del Estado, contra los actos administrativos del Ministerio de Justicia, a los que la demanda se contrae, debemos declarar y declaramos no ser conformes a derecho y, por consiguiente, anulamos los referidos actos administrativos al presente